Para ver aviso legal de clic en el siguiente Hipervínculo
(NECESITA CONEXIÓN A INTERNET)
<http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/condicion.htm>

INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL

TEMA: JURISPRUDENCIA SOBRE CONTRATOS EDUCATIVOS

RESUMEN: En el siguiente informe investigativo, se aborda de forma muy resumida, el contrato educativo, desde el punto de vista exclusivamente jurisprudencial. En las bases de datos de la Biblioteca no se encuentra información doctrinal acerca de esta temática, que sí ha sido tratada por nuestra Sala Constitucional, en los dos extractos jurisprudenciales que a continuación se reseñan, y en los que se analizan los mismos, en relación con el derecho a la educación consagrado en la Constitución Política.

Índice de contenido

1. Jurisprudencia.....	2
a. El Centro Educativo no está Obligado a Brindar el Servicio, si el Padre de Familia no ha Cumplido con la Contraprestación Pecuniaria.....	2
b. Relacionado con Contrato de Servicios Educativos ante el Colegio Nuestra Señora de Sión.....	2

DESARROLLO:

1. Jurisprudencia

a. El Centro Educativo no está Obligado a Brindar el Servicio, si el Padre de Familia no ha Cumplido con la Contraprestación Pecuniaria

[SALA CONSTITUCIONAL]¹

"El derecho a la Educación que la Constitución Política consagra establece, a su vez, el deber correlativo del Estado de brindar este servicio público de manera gratuita. En forma paralela, la Carta Política Nacional también garantiza la iniciativa privada en este campo, la que por su naturaleza no puede entenderse gratuita, ya que ello afectaría su propia existencia. El amparado tiene derecho a completar su proceso educativo, de manera gratuita, en un centro de naturaleza pública; sin embargo, esa misma condición no puede pretenderla de un centro educativo privado, con el que ha suscrito un contrato de prestación de servicios educativos obligándose a cancelar mensualmente ese servicio. En criterio de la Sala el centro educativo privado no está obligado a brindar el servicio educativo, si el padre de familia no ha cumplido con la contraprestación pecuniaria a la que se ha obligado; sin embargo, la suspensión de los servicios educativos de manera alguna puede ser intempestiva ni arbitraria, y en todo momento debe el centro -tomando en cuenta la naturaleza de la actividad que desarrolla- garantizar al educando que puede continuar con su formación educativa en otro centro educativo, público o privado. En el caso que nos ocupa, el Colegio Monterrey dispuso suspender los servicios educativos al amparado, una vez concluido el ciclo lectivo, y, puso a disposición del quejoso la documentación que le permitiría realizar, sin mayor tropiezo, el traslado del menor a otro centro; consiguientemente, no estima la Sala que la actuación de la accionada haya sido arbitraria o lesiva de los derechos fundamentales del amparado.

II. Según informó la accionada, el recurrente canceló su deuda pendiente con la institución y actualmente el menor amparado recibe, normalmente, sus lecciones en ese centro; motivo por el cual, el recurso de amparo, además, ha perdido interés actual."

b. Relacionado con Contrato de Servicios Educativos ante el Colegio Nuestra Señora de Sión

[SALA CONSTITUCIONAL]²

"Alega el recurrente que debido a problemas económicos necesitaba

trasladar a la amparada a otro colegio por lo que solicitó a la institución recurrida que se le entregaran los documentos correspondientes para efectuar el traslado; sin embargo, en el Colegio recurrido se han negado a cumplir con esa solicitud bajo el argumento de que primero debía cancelar lo adeudado, lo que considera que lesiona el derecho a la educación de la amparada y por ello solicita la estimación del recurso.

Según se desprende del expediente, la amparada cursaba estudios en el Colegio Nuestra Señora de Sión y para ello su padre firmó un contrato de servicios educativos con esa institución; contrato en el que se comprometió a pagar los montos establecidos para las mensualidades correspondientes. Ahora bien, a pesar de las condiciones bajo las cuales suscribió ese contrato, el recurrente incumplió con su parte de las obligaciones adquiridas y dejó de pagar algunas mensualidades establecidas, sin embargo, según se indica, se logró llegar a un acuerdo de pago y la menor continuó cursando sus estudios en esa institución, aún cuando posteriormente se incumplió de nuevo la obligación de pago por parte del recurrente. Sobre el particular, alega el recurrente que el Colegio de Sión se ha negado a entregarle los documentos que necesita para trasladar a la menor amparada a otro colegio, pero según se desprende del expediente, no consta que efectivamente el recurrente hubiera gestionado la entrega de tales documentos y en la contestación de la audiencia otorgada por la Sala, se afirma que ninguno de los padres de la menor ha solicitado documentos para traslado, ni certificación ni tampoco se apersonaron a la entrega del Informe al Hogar.

Por tales razones, si los propios interesados no han solicitado de manera expresa y formal los documentos de traslado de la amparada para matricularla en otro centro educativo, no lleva razón el recurrente al afirmar que se han lesionado los derechos de la amparada pues es evidente que no puede haber negativa a entregar tales documentos cuando ni siquiera se han solicitado formalmente ni muchos menos se ha llevado a cabo el procedimiento formalmente establecido al respecto. Ahora bien, en todo caso es importante recordar que la Jurisprudencia de esta Sala ha sido particularmente celosa en proteger los derechos de los niños menores, en edad escolar, frente al poder de los centros de educación para regular la permanencia durante todo el año escolar y para exigir ciertos requisitos para obtener la matrícula, lo que se acentúa aún más, en el caso de las escuelas y colegios privados. Así, se ha dicho que no se pueden retener las calificaciones de los menores por falta de pago de las mensualidades, por cuanto este proceder obstaculiza el derecho de los amparados de continuar con su educación y aunque existan deudas pendientes con el centro de enseñanza, se tiene la vía

jurisdiccional para su cobro. (En ese sentido sentencia número 8345-99, de las trece horas con quince minutos del tres de diciembre de mil novecientos noventa y nueve y sentencia número 2000-000898 de las diecisiete horas doce minutos del veintiséis de enero del dos mil).

Por los motivos expuestos, la Sala estima que en el caso concreto no se han lesionado derechos fundamentales de la amparada y por ello no procede más que la desestimación del recurso, como en efecto se ordena.-"

FUENTES CITADAS:

1 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 4089-1996, de las quince horas con quince minutos del trece de agosto de mil novecientos noventa y seis.

2 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 3078-2005, de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciocho de marzo de dos mil cinco.